

Continuación de la 21ª sesión de prórroga. 1º de Febrero de 1912

PRESIDENCIA DEL DR. VICTORINO DE LA PLAZA

SUMARIO: I.—Asuntos entrados.

II.—El señor Senador Mendoza hace moción para tratar sobre tablas un proyecto de ley, en revisión, abriendo un **crédito** al Departamento del Interior, por la cantidad de \$ 5.250 moneda nacional, con destino á abonar el servicio fúnebre prestado por la casa Lázaro Costa, con motivo de las exequias del ex Senador Nacional doctor Leonidas Carreño. Se aprueba.

III.—Asuntos entrados.

IV.—A moción del señor Senador Benito Villanueva se trata sobre tablas el proyecto de ley, en revisión, designando una **Comisión Interparlamentaria** para que estudie durante el receso del Congreso diversos proyectos sobre legislación obrera. Se aprueba. Se designa á los señores senadores González y Civit para formar parte de la comisión.

V.—Se aprueba el asunto á que se refiere el número II.

VI.—Se aprueba una moción del señor Senador Benito Villanueva para que se trate, con ó sin despacho de Comisión, un proyecto de ley, en revisión, sobre **debentures**, inmediatamente de sancionado el proyecto de reforma á la Ley Electoral.

VII.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre **reforma** á la **Ley Electoral**. No termina.

Señores Senadores

—
Carbó
Civit
Echagüe
Garramuño
González
Güemes
Guñazú
Irigoyen
Láinez
Maciá
Mendoza
Olaechea y Alcorta
Padilla
Pinto
Posse
Resoagli
Terán
Villanueva (B.)
Virasoro
Funes, Peña y
dice el

En Buenos Aires, á
primero del mes de Fe-
brero de mil novecien-
tos doce, reunidos en
su sala de sesiones el
señor Presidente, los
señores senadores al
margen consignados y
el señor Ministro del
Interior doctor Inda-
lecio Gómez, y con in-
asistencia de los seño-
res senadores Carrillo,
Godoy, Malbrán, Ove-
jero y Villanueva (E.)
(con aviso), Del Pino,
Soldati (con licencia),

Sr. Presidente — Continúa la sesión
con diez y siete señores senadores pre-
sentes.

Se va á dar cuenta de los asuntos en-
trados.

I

—Se lee:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1.º Abrese un crédito suplemen-
tario al Departamento de Guerra por la can-
tidad de ochenta y ocho mil setecientos no-
venta y seis pesos con cincuenta y cinco cen-
tavos moneda nacional (\$ 88.796.55 moneda

Febrero 1.º de 1912

CAMARA DE SENADORES

Cont. sesión 21.ª de prórroga

moneda nacional de curso legal, con destino á abonar el servicio fúnebre prestado por la casa Lázaro Costa, con motivo de las exequias al señor Senador por La Rioja doctor don Leonidas Carreño.

Art. 2.º Este gasto se hará de rentas generales con imputación á la presente ley.

Art. 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, á 31 de Enero de 1912.

E. CANTÓN.

A. Supéna.

—Sin observación, se aprueba en general y en particular.

VI

Sr. Villanueva (B.)—Pido la palabra.

Antes de pasar á la orden del día, necesito hacer una aclaración. Hace como quince días, vino de la Cámara de Diputados, en revisión, un proyecto sobre debentures. Este proyecto fué pasado á las comisiones reunidas de Legislación y Hacienda. Desearía saber en qué estado se encuentra ese asunto y si hay probabilidad de que sea despachado brevemente.

Sr. Güemes—Las comisiones de Hacienda y Legislación tienen á su estudio el proyecto de ley sobre debentures y deben despacharlo de un momento á otro.

Sr. Villanueva (B.)—Creo que es un poco difícil que lo despachen, porque entiendo que las comisiones, ya sea por ausencia de los miembros ó porque algunos de ellos son reemplazantes, están dislocadas. Se trata de un asunto que ha sido muy bien estudiado en la Cámara de Diputados, y allí fué tratado por indicación del doctor Montes de Oca y aprobado en una sola votación en general y en particular, para no hacerle ninguna modificación en el debate, ni más ni menos que como se votan los códigos. Aquí va á pasar lo mismo. Es un asunto en el que hay mucha urgencia en despacharlo y muchos intereses comerciales están esperando su despacho para realizar operaciones que están solamente preparadas; entre ellos la edificación de la nueva Bolsa de Comercio. Yo voy á proponer que se trate hoy sobre tablas ó en la sesión próxima, es decir, que se

constituya el Senado en comisión. Pido el apoyo de mis honorables colegas.

Sr. Guinázú—Pido la palabra.

Si el señor Senador por la Capital no tuviera inconveniente en pedir que este asunto se tratara cuando se termine de considerar la Ley Electoral, yo lo acompañaría con mi voto.

Las dos comisiones que han tomado á su estudio este asunto se han preocupado de él, y, como ha dicho el señor Presidente de la Comisión de Hacienda, muy pronto presentará su dictamen.

Ahora, si no tienen tiempo de expresarse para cuando se haya terminado la consideración de la reforma de la Ley Electoral, sería el caso de que se considerara el asunto sin despacho de Comisión.

Sr. Villanueva (B.)—En vista de la razón aducida por el señor Senador por San Luis, voy á modificar mi moción en el sentido de que éste sea el primer asunto que se trate, con ó sin despacho de Comisión, inmediatamente que se sancione el proyecto de reforma de la Ley Electoral.

Varios señores senadores—Apoyado.

Sr. Presidente—Estando apoyada la moción del señor Senador por la Capital, se va votar si se da prioridad inmediatamente de sancionada la Ley Electoral al asunto á que el señor Senador se ha referido.

—Se vota esta moción y se aprueba.

VII

Sr. Presidente—Continúa la consideración del proyecto de reforma de la Ley Electoral.

Sr. González—Pido la palabra.

Mi primer deber es pedir disculpa á la honorable Cámara por la demora que por mi causa ha tenido este asunto. Mi salud no se encontraba bien, ni ahora tampoco, pero he creído preferible poner en peligro la mía, que al fin es una, antes que la de los señores senadores, que son más y más preciosas que la mía. La falta absoluta de reposo en mi vida pública y mis muchas fatigas personales, sin duda, me han traído á esta situación; y, por eso renuevo mi pedido de disculpa, y crean mis honorable colegas que

en ningún caso ha podido haber en mí un sentimiento de jactancia, que está muy lejos de mi modo de ser, y menos el deseo de crear alrededor de mí persona una expectativa á la que nunca podría corresponder; y no se imaginen por un instante, que haya podido animarme un propósito de obstrucción, lo que sería hasta infantil, visto que ningún provecho habría de alcanzar con ella, y ante el hecho de haberme puesto á la disposición de la Comisión para todo lo que fuera dar término á esta cuestión, ya demasiado debatida, y mucho más, tratándose de una ley tan necesaria, y de una urgente aplicación.

Debe de tenerse en cuenta, además, los antecedentes que me ligan á esta legislación, y constituyen un vínculo personal ineludible. No soy, pues, á este respecto un indiferente, porque en la primera época en que me ha tocado ocupar el Ministerio del Interior, he sido autor de una ley de reforma electoral fundamental que llegó á ser practicada en el país, y tuvo como base los anhelos expresados desde 1857 por Sarmiento, que la inició por primera vez hasta los últimos proyectos presentados por iniciativas diversas, las cuales, en 1893, tomaron forma en un trabajo valiosísimo preparado por cinco jurisperitos de la más alta distinción en el país. Así, pues, mi participación en este asunto sale del carácter de una obligación común, porque interesa, además, mi breve y modesta historia política.

Esta reforma tiene antecedentes legislativos que es necesario tener en cuenta para determinar la razón de mi actitud y de mi disidencia en el seno de la Comisión. La ley 4161, dictada en 1902, sobre la base del régimen uninominal, ha sido modificada posteriormente por otras dos, la 4578 de 25 de Julio de 1903 y la 4719, de 5 de Octubre de 1905, con las cuales no estuve de acuerdo. Se inspiraron, sin duda, en dos propósitos de cuya sinceridad no puedo dudar, pero los he creído y creo profundamente erróneos. Estas reformas consistían en cambiar el sistema uninominal por el de lista, viejo conocido en nuestras prácticas políticas; la segunda consistía en suprimir la penalidad que se aplicaba á los altos funcionarios públicos; de manera que la reforma hería el punto más

sensible ó vital de la ley 4161, la cual tenía por objeto aproximar al elector al elegido, estimular el sufragio y, sobre todo, establecer una sanción penal para las faltas y fraudes, haciendo pasible de responsabilidad judicial á aquellos que ordinariamente, en todas nuestras contiendas políticas, son los únicos inmunes, los autores más efectivos de la degeneración política: me refiero á los autores del fraude y de la coacción oficiales.

La reforma hecha á la ley de 1902 la destruía y le quitaba toda su virtualidad; y, como dijo Alberdi de Rivadavia, por haber suprimido los centros comunales originarios había creado la maquinaria sobre la cual se entronizó Rosas y despotizó al país durante veinte años, la Presidencia Rivadavia había caído víctima de la pena del talión, como autora de esa reforma. El error fué grande y las consecuencias posteriores las hemos seguido sufriendo en esta agitación incesante de nuestra vida pública, y en esta falta de armonía entre nuestra cultura intelectual, económica y moral, con la cultura política, según lo ha observado ya Avelledana.

Yo, señor Presidente, respecto del sistema fundamental, no he variado de parecer. He estudiado hondamente esta cuestión, y me he informado de la práctica universal al respecto; y, tanto en el terreno de la teoría como en el de la experiencia de los países más adelantados, no he encontrado sino confirmaciones cada vez más decisivas para mis opiniones. Creía entonces, como creo ahora, que el sistema uninominal realiza no sólo la mejor forma de conciliar los anhelos y los ideales del sufragio en todos los pueblos, sino también que concilia estas exigencias ideales con los resabios y defectos acumulados de las sociedades humanas. Por eso creo que no es un sistema destinado á decaer, sino, por el contrario, al mismo tiempo que sigue progresando, realiza el espíritu evolucionista de las sociedades políticas nuevas. Por eso es que, hombres de estudio y profesores eminentes, juristas de justo renombre, siguen, á pesar de todas las combinaciones que el ingenio humano y la matemática política han inventado, sosteniendo estos dos sistemas originarios, primarios, diré así, que se disputan el terreno de la experiencia: el

sistema de lista y el sistema uninominal.

Confirma, además, esta convicción científica, la breve prueba que el sistema ha tenido entre nosotros, sobre lo cual no puede haber dos opiniones, salvo que se quieran desconocer hechos reales: es una convicción generalizada en el país que en muchos años no se había presenciado un espectáculo más halagador que aquel en que se vieron no sólo despertar de pronto todos los entusiasmos perdidos ó muertos de la vida cívica, sino también llegar á las bancas de la Cámara de Diputados representantes genuinos, independientes, ajenos á las combinaciones ó caucos de los comités de los partidos, y sorprender aún á los mismos que, en larga actuación política, estaban acostumbrados á ver siempre á los comicios sancionando combinaciones hechas de antemano.

Además: después de estas dos leyes á que me he referido, se ha modificado últimamente, de una manera esencial, la formación del padrón cívico ó el registro electoral. No he tenido ocasión de tomar parte en la preparación de la ley; pero creo que, aunque ella nos diese un registro electoral numerosísimo, hay en ella un fondo peligroso, como es el encargar al ejército de constituir la base de los derechos electorales. Basta enunciarlo para darse cuenta de los peligros que entraña, considerando las largas y dolorosas experiencias de su ingerencia en la política, y el hecho de que, por su naturaleza, la institución militar no debe ser mezclada á las contiendas de los partidos ni á los procedimientos inherentes al desempeño de las funciones electorales.

Pero esto es de orden transitorio, y el tiempo dirá quiénes tuvimos razón. La ley 8130 establece el padrón cívico militar; es un hecho consumado, es una ley del Congreso, y yo no puedo sino aceptarla é incorporarla al mecanismo de la nueva ley, desde que tengo el deber de acatar las altas resoluciones del Congreso.

Por otra parte, señor Presidente, para explicar la razón de mi firma en el despacho en general, debo declarar, con la mayor sinceridad, que he creído un deber de conciencia personal y política colaborar al éxito de esta reforma en la extensión que mis convicciones me hi-

cieran posible aceptar.

No he querido asumir una actitud de estudio, de examen minucioso y de extremos teóricos en esta materia; sino, por el contrario, acudiendo á esa máxima regla de conciliación, que la buena filosofía práctica aconseja á veces, entre las teorías y las situaciones del momento, he optado por ponerme francamente en la corriente de la conciliación, y prestar, en la medida de lo posible y compatible con mis convicciones, mi concurso para que la ley salga sin tropiezos con la mayor perfección posible.

Por otra parte, en repúblicas como la nuestra, y en todas aquellas en que la rotación de los partidos políticos es ley fundamental, y la renovación de los poderes públicos su esencia, es justo, y es una ley natural, histórica y política, que cada situación tiene la responsabilidad de su época. Es justo, hasta cierto punto, pues, facilitarle y darle todos los medios para que haga efectivas las promesas con que quiere realizar la felicidad pública y cumplir su programa, y para que las responsabilidades, por la falta de la no realización de esas promesas y las causas de los posibles desastres ó desengaños, no sean atribuidas á las opiniones adversas.

He aceptado el mecanismo general de la ley, sin entrar á detalles minuciosos, ni á móviles intransigentes; y, además, en gran parte, en lo que se refiere á declaraciones y definiciones de derechos y deberes, garantías y sanciones penales y procesales, el nuevo proyecto coincide en absoluto, ó en muy poca cosa se diferencia, con el proyecto que tuve el honor de proponer en 1902 y que fué convertido en la ley 4161.

Por esta razón, pues, no tengo inconveniente, y sí mucho placer, en concurrir en la forma que he manifestado, á la sanción en general de este despacho.

Mis disidencias con el proyecto de la Comisión versan solamente sobre un punto: sobre el sistema.

Pero, antes de eso, haciendo una breve síntesis del contenido de la ley, y siguiendo el orden, también abreviado que el Senado y la Cámara de Diputados han adoptado para discutirla, puedo reducir á tres puntos solamente los que forman, diré así, la base triangular de estas conclusiones: el voto obligatorio, el procedimiento ó mecanismo comicial

ó electoral y el sistema de voto limitado ó lista incompleta.

He leído los fundamentos que el Poder Ejecutivo da á su nuevo proyecto; y si es encomiable la brevedad y parsimonia con que ha expresado esos fundamentos, quizá el espíritu de estudio y de mayor información del país y de las cámaras, habrían agradecido un poco más de detenimiento y de explicaciones al respecto. Ha venido, sin duda, á llenar este vacío la amplia é ilustradísima discusión que ha tenido lugar en la otra Cámara; discusión interesante bajo muchos puntos de vista, no sólo por el espíritu doctrinal y político que la ha animado, sino por el halago con que el amor propio nacional ha visto producirse en una de nuestras cámaras un debate que haría honor á los más ilustrados parlamentos del mundo.

Las opiniones, como ha podido verse, han sido hondamente divididas respecto de dos puntos fundamentales: el voto obligatorio y el sistema electoral. El reflejo de esta diversidad de opiniones, que reina en el campo de la teoría, de la ciencia política universal y de la experiencia, en el seno de la Cámara de Diputados, demuestra en cierto modo, realmente halagador para nuestro patriotismo, el espíritu de independencia y la serenidad con que ha sido tratado por la otra Cámara. Se ha visto que en el seno del Congreso, como en el seno del gabinete, el interés por la reforma ha sido vivo, ha sido muy hondo: solamente hemos notado, los que observamos las cosas de un punto de vista más general y con un criterio más amplio que el del momento, que esta preocupación interna del parlamento no ha tenido su repercusión en las esferas sociales. La indiferencia reinante, sobre la cual parece que no hubiera discrepancia, se ha manifestado esta vez también, no sólo respecto del comicio, á que se llama y no se responde, como decía Pellegrini—vuelvo con agrado á citar su nombre—sino en la falta de interés respecto de la ley que más preocupa, por ser la que más importancia tiene para las prácticas de la vida política y cívica del país; y es sintomático, sin duda, respecto del estudio de esta reforma, el hecho de que el pueblo argentino, en ninguna de sus clases más influyentes,—y exceptúo las nobles iniciativas de un núcleo de estudiantes universitarios y de una valiente

corporación,—no haya manifestado el menor interés, el menor deseo de acercarse á los poderes públicos, la menor intención de hacer notar, por esos movimientos de expresión de voluntad colectiva, tan propios de las democracias, cuál es la aspiración popular al respecto. Digo que es un silencio, una indiferencia sintomática respecto del destino de esta ley, porque ella, según el decir de sus sostenedores, se propone remover esta indiferencia, agitar este fondo muerto de nuestros sentimientos cívicos y hacer que la masa ciudadana concurra á los comicios, ya que no por el entusiasmo propio, al menos por el temor de la pena; y decir, pues, estímulo de la pena, es confesar desde luego que el sistema carece de virtud propia para producir el acercamiento del ciudadano al comicio.

El voto obligatorio es la fórmula con que en la legislación y la ciencia política actual se expresa este problema social y político, medio de combatir el ausentismo, el indiferentismo, el «m'enfichisme», que hace que todas las clases sociales más importantes se mantengan alejadas de la vida cívica. Esto ha llegado á ser una preocupación tan grande en las esferas doctrinarias y científicas de Europa, que ha producido una literatura abundantísima de libros, proyectos y trabajos de todo género en que se lo estudia, no solamente como un hecho real, sino como un fenómeno de orden social íntimo; tratando de crear al respecto una ciencia curativa para este mal tan hondo, que no es propio de nuestra sociedad solamente, pero que en ella reviste un carácter singularmente grave.

Para mí el voto obligatorio es una fórmula necesaria en una reforma electoral en la época presente, y tratándose de un país como el nuestro, no se me ocultan todos sus peligros, no se me ocultan todas las dificultades para realizarlo entre nosotros; pero, teniendo en cuenta todos sus defectos y poniendo en el otro platillo de la balanza sus ventajas, no he vacilado en optar por su aceptación, en la esperanza de que, por lo menos, la simple declaración sirva de incentivo ó estímulo, por la moral de la ley, para que los ciudadanos crean un poco más en el deber de concurrir á los comicios.

Desde luego hay un argumento sencillísimo que, podría decirse, es una ecuación primaria en toda combinación de orden legislativo-político en una República; y es que el voto es la única forma, es la unidad molecular con que se constituye esta entidad orgánica que se llama el gobierno. El sistema representativo republicano consiste, como es sabido, en la participación del ciudadano en la formación de su gobierno.

Si hemos de reconocer que el ciudadano puede ó no llenar este deber, y si reconocemos solamente un derecho voluntario ó caprichoso, reconocemos forzosamente que el gobierno no es una existencia necesaria, y que el sistema republicano es una cuestión de hecho y no una cuestión orgánica. La obligación del voto, en el terreno de la doctrina, es un elemento indispensable para la organización del gobierno, y no habría lógica ninguna—y en la práctica importaría encomendar á la fuerza solamente la formación del gobierno—en reconocer que el ciudadano puede no tener participación en la función electiva. Generalizando el hecho, resultaría que, si los ciudadanos pueden renunciar á la formación del gobierno ¿quién lo formaría? ¿Es una generación espontánea? ¿es una simple aglomeración de fuerzas materiales para dar por resultado un hecho colectivo que se llama gobierno? Es decir, esto es precisamente la negación del gobierno orgánico republicano que hemos adoptado nosotros. Durante la larga época de la anarquía, cualquier jefe militar, cualquier aventurero afortunado, cualquier hombre de valor y de temerarias empresas, puede conducir una masa y erigirse en gobierno: es el gobierno de las tribus, el gobierno de la barbarie! Mientras que la teoría orgánica, sociológica, científica del gobierno republicano está representada por el voto, esto es, la célula originaria que va á formar ese tejido destinado á vivir y evolucionar constantemente, que se llama la organización vital del gobierno republicano.

Esto, como he dicho, es la teoría en el dominio de la ciencia. La práctica es una cosa distinta; y, es tanto más diferente, cuanto más atrasados son los pueblos, cuanto más accidentada es su evolución política; y entre nosotros no es de extra-

ñar, pues, que una duda grande asalte el espíritu respecto de la realización actual de este sistema, cuando sólo llevamos cincuenta años de vida, más ó menos orgánica y ordenada, y cuando tantas incoherencias, heterogeneidades, deficiencias y elementos antagónicos constituyen todavía nuestra sociabilidad política, nuestra entidad étnica. Pero, en realidad, el mal que el voto obligatorio, y, en general, el mal que el voto orgánicamente ejercido y voluntario y totalmente practicado, vendría á curar, es muy hondo en la historia de nuestro país: se remonta á orígenes muy antiguos, que historiadores autorizados han colocado en las épocas coloniales; pero, á mi juicio, no hay necesidad de ir tan lejos para encontrar su origen.

El horror al comicio, señor Presidente, ha nacido en nuestro país del horror á la sangre, á la violencia y al atropello brutal. Eso ha sido engendrado en nuestras luchas políticas, no en tiempo de la colonia, donde no se elegía, donde no había comicio, sino en la época de la evolución, en la época orgánica, más bien dicho época inorgánica, en la que nuestro país se ha debatido y tropezado con tantas dificultades para llegar á la formación del gobierno.

Este país, según mis convicciones, después de un estudio prolijo de nuestra historia, no ha votado nunca. El sufragio universal, en la extensión deseada de esta palabra, no se ha practicado en la República Argentina. O han sido ensayos de buena fe, sinceros, como los de los primeros tiempos de las asambleas, de la Independencia y de la Revolución, ó han sido simulaciones groseras para satisfacer resoluciones personales de los déspotas transitorios ó duraderos que hemos tenido en nuestra historia, ó han sido conciliaciones posteriores del espíritu orgánico, que trataba á toda costa de presentar formas de gobierno á la civilización del mundo exterior; pero en el fondo siempre el mismo fenómeno: la organización *á posteriori* de los comicios, para responder á fórmulas imperativas, previas, y, en suma, varias veces lo he dicho en diversas formas,—el gobierno argentino es el resultado de la cultura personal de los hombres de gobierno, de los hombres de Estado, que en distintas épocas han regido los destinos del país. Han sido, pues, en gran medida, gobier-

nos de hecho; y el perfeccionamiento de las instituciones, el relevamiento de la masa inferior, destinada á producir este movimiento orgánico ha venido siguiendo como arrastrado por la inspiración personal de aquellos; y ha sido su influencia moral y el esfuerzo de los gobiernos que ellos han organizado de hecho por convenciones políticas, por pactos militares y por resultados de otro orden, la influencia civilizadora y moral que esos hechos han derramado en el pueblo, lo que ha producido, junto con una lenta acción educativa escolar, la poca cultura política de que el pueblo argentino ha dado muestras en presencia de los sistemas electorales que hasta ahora han regido.

El fraude pues, condenado señor Presidente, en una página brillante de Sarmiento, rememorada en un discurso notable por su fondo y doctrina y su habilidad parlamentaria, del miembro informante de la Comisión de la Cámara de Diputados, señor de Vedia, y recordada por el doctor Pellegrini en el informe con que esa misma ley fué presentada en esta Cámara, tiene allí condensada su dolorosa historia. No necesito, pues, aventurarme al calificativo de pesimista ni quizá de mal ciudadano, dado el criterio corriente según el cual no deben decirse las cosas que hieren ó que duelen al patriotismo ó al amor propio nacional; en mi opinión hay que decir las, para mostrar en toda su desnudez, en toda su elocuencia, los vicios más grandes, á fin de llevar sobre ellos los correctivos más enérgicos. Pellegrini, que ya he citado varias veces, y en este caso necesito citar otra vez, porque hay un hecho de carácter muy significativo en la actuación de este hombre tan singular en la historia de nuestras luchas políticas; todos conocemos su gran espíritu de combatividad, y el apasionamiento que ponía en todos los actos de su vida pública; sin embargo, leyéndolo á través de diez años, me hace una impresión tan rara y extraña tratándose del hombre de lucha. Veo, ahora, á través de diez años, la alta serenidad é imparcialidad extraordinaria con que pudo levantar su espíritu de las agitaciones de la lucha del momento y de las pasiones ardientes, para colocarse en el terreno de la más alta justicia y describir la llaga social con criterio

verdaderamente filosófico y jurídico: Pellegrini, haciendo la etiología del fraude en la República Argentina, decía estas palabras que vale la pena renovar en esta sesión, ya que en el seno de este cuerpo fueron pronunciadas:

«Yo creo que la causa original, fundamental, de todos los vicios políticos que han llegado hasta suprimir el régimen electoral en la República Argentina, está en el fraude ó en la simulación electoral... El fraude suprime el voto, porque lo hace inútil é ineficaz; y, al hacerlo inútil é ineficaz, aleja de las urnas á todos aquellos que no hacen de la política una profesión, es decir, á la inmensa masa de pueblo, la masa tal vez más sana, que tiene más intereses que cuidar y que forma en todos los países la verdadera mayoría conservadora, que decide en todas las elecciones, en las opiniones, tendencias y propósitos de los hombres públicos y partidos políticos que se alternan en el gobierno en los países donde hay verdadera forma representativa; es debido justamente á esa masa de opinión que resuelve el triunfo ó la que da á cada partido apoyo á uno ó á otro cuando llega el día de la elección. Ese efecto se ha hecho palpable entre nosotros, el mal existe en la República Argentina, y es justamente la abstención y la atonía política. Nadie parece interesarse por la causa pública; es inútil llamar á inscripciones, nadie se inscribe; es inútil llamar á elección, nadie va á votar. ¿Por qué? Porque todos tienen el íntimo convencimiento de que cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, es inútil, porque el fraude va á dominar en todo».

He creído siempre que tenemos todos los legisladores argentinos y los que nos ocupamos de enseñar, el deber de decir la verdad, el deber de estudiar, con toda crudeza y sinceridad, todos los antecedentes de nuestra vida política, y mostrarla tal como es, con todos sus errores, para hacer posible de esa manera, como decía, la aplicación del correctivo. Recordando, á este respecto, un breve diálogo de un personaje de Shakespeare. Un amigo le dice á Hamlet algo que afectaba el profundo secreto de su vida. Hamlet le contesta que debe decir toda la verdad. Se trata de un secreto demasiado profundo y que afecta la integridad de su honor. Hamlet

le contesta que es necesario decir la verdad al médico; porque, si ésta se le oculta, puede llegar un día en que la carne se caiga á pedazos.

Es preferible ser cruel, ser sincero con nosotros mismos y despojarnos de ese falso argumento «del qué dirán de afuera». Nadie está afuera en la comunidad de las naciones, como nadie está afuera en el orden de las relaciones privadas. Todos nos conocemos, y la naturaleza humana, como la social, son iguales en todas partes. Nuestros vicios son los mismos que los de cualquier nación europea, pues tenemos la misma sangre, la misma civilización, y, por lo tanto, los mismos defectos. Por eso, esa teoría de las ocultaciones y negativas de defectos nacionales son inútiles; y, sino, veamos el ejemplo que nos dan otras naciones, en donde no sólo defectos de orden orgánico como éste, sino vicios más denigrantes, que aparecen de pronto en ciertos focos de la sociedad humana, son puestos en descubierta con toda energía, para buscar el correctivo interno y también la ráfaga de afuera, que suele á veces ser más saludable que la de adentro.

Nosotros somos un organismo político roído por el fraude y la mentira, y estas dos cualidades inherentes á nuestra viciosa educación política son las que determinan actualmente todos nuestros males sociales. Desde la escuela primaria hasta la universidad, hay que predicar la verdad, hay que hacer el análisis científico de la célula humana de que está formado un analfabeto al entrar á la banca escolar, de donde lo hemos de sacar á la vida pública, en donde va á influir en los destinos de los demás ciudadanos; y, educar á éste en el fraude y la mentira, es preparar la disolución nacional, y días muy amargos para la República. Por eso creo que debemos proclamar la verdad y buscar sinceramente el remedio.

Sabemos muy bien cómo se origina y cómo se desarrolla el proceso electoral entre nosotros. Los mejores gobiernos, los hombres de Estado más eminentes y honestos, todos los que han llegado á las altas funciones políticas se sienten transformados ante la enormidad de la responsabilidad que se han echado encima. Prometen grandes reformas, creen en ellas y pueden llegar hasta mover las

masas populares á ir á las urnas á depositar sus votos y presentar el espectáculo de una República animada de los más vivos entusiasmos cívicos. El producto del comicio libre empieza á transformarse desde la primera junta de escrutinio; después en la junta general del distrito y después en la legislatura, ó en la Cámara nacional respectiva, y, últimamente, es el poder supremo, el que se encarga de hacer la transmutación sustancial del elemento «voto popular» en elemento «voluntad gobernante.» Se produce así, en realidad, una especie de alquimia política, como se ha dicho muchas veces, por medio de esta transmutación del voto operada á la sombra de principios cristalizados en la Constitución, que facilitan la realización de este proceso.

Por ejemplo, puede ser muy sincero el resultado de un comicio electoral, muy sinceros los escrutinios realizados sucesivamente por diferentes juntas; pero llega á la asamblea política provista de inmunidades colectivas, según un artículo de la Constitución que dice que cada Cámara es juez exclusivo de la validez de los títulos de sus miembros. Entonces, por más estricta que sea la justicia común al castigar los delitos electorales, llega la cuestión al alto tribunal político que debe juzgar en definitiva el proceso electoral, y se encuentra que no hay juez imparcial para pronunciar su soberana decisión, y ésta se produce por razón de partido ó por razón suprema de gobierno ó de Estado, y, así, en definitiva, resulta que el voto popular es transmutado y adulterado. Entonces, pues, lo que hay en el fondo es la falta de justicia política, que es necesaria en el proceso político; y, mientras no fundemos y aseguremos esas garantías y responsabilidades, no hemos de conseguir inspirar confianza á los ciudadanos para que vayan tranquilos y entusiastas á depositar su voto. Todos estos son elementos concurrentes á producir el desengaño, la desilusión, y en el fondo todo es desconfianza, falta de fe en el resultado, y es un concepto elemental de psicología ó filosofía que no hay nada más contrario al ejercicio de la libertad y de la potencialidad espiritual del hombre que el esfuerzo sin objeto y sin resultado.

Pero no solamente tenemos estas in-

munidades parlamentarias donde se condensan las razones de partido, las resoluciones irrevocables y los resultados efectivos del proceso electoral. Hay también otras maneras de desvirtuar la eficacia del voto, á que se ha recurrido en nuestro país: se invoca en último caso la amnistía, esa palabra tan noble, tan evangélica, tan grande con la cual, indudablemente, todo orador alcanza fáciles aplausos, pero no ve los resultados funestos que la amnistía frecuente y ordinaria en nuestras luchas políticas, trae consigo, el confirmar en la conciencia colectiva el concepto de la ausencia de la sanción judicial suprema, la sanción efectiva de los delitos y de las faltas electorales.

Las revoluciones en nuestro país han tenido en muchos casos como aliciente principal esta seguridad de la amnistía. Los promotores de sublevaciones ó motines en el seno de nuestro antiguo ejército—ya que de todos estos recursos se ha valido la argucia política para derribar ó levantar gobiernos,—han tenido por estímulo la confianza en la impunidad, en el perdón, en la falta absoluta de sanción definitiva é irrevocable del delito. Cuando todas estas causas contribuyen á formar el espíritu público y esa situación de «atonía», que es la verdadera palabra para designar este fenómeno orgánico, es necesario ver cuáles son los remedios más eficaces para modificar tal estado moral. El pueblo en realidad, en nuestra historia política, con la falta de fe en el resultado de la acción cívica, ha llegado al convencimiento de que no hay más camino para modificar las situaciones establecidas que la revolución.

Nosotros nos enorgullecemos en poder declarar que la época de las revoluciones ha terminado. Yo me acuerdo de que el 3 de Febrero de 1905 debía presidir una asamblea de profesores; era ministro de instrucción pública y había terminado mi discurso de apertura de la asamblea con un movimiento sincero de mi espíritu, un tanto optimista, diciendo: «ya que la era de las revoluciones felizmente han concluido en nuestro país...» Al día siguiente tuve que corregir la frase é invertir totalmente su sentido!

¿La era de las revoluciones ha terminado en nuestro país? Puede haber terminado por una serie de años más ó me-

nos larga; pero yo digo que, mientras no demos con el sistema, con el régimen electoral suficientemente seguro para dar expresión real á la voluntad popular y representación efectiva á todos los movimientos del anhelo público y de los intereses que agitan á la sociedad argentina, no creo que pueda haber un hombre de estado capaz de afirmar de una manera absoluta que la era de las revoluciones ha concluido; y menos, mientras tengamos esta falta de concepto del delito político, mientras siga primando esta costumbre de que los delitos electorales, la venta del voto, el fraude, se consideren como un acto natural, mientras no se llegue á modificar el concepto de que el delito electoral no es un delito, como un robo, ó cualquier otra violación de derechos privados.

Y véase, señor Presidente, hasta dónde va este mal; porque, hablando con la misma franqueza, las leyes políticas son siempre débiles en razón de la altura del delincuente, y son tanto más fuertes cuanto más bajo, en el orden social, está colocada la víctima. Esta es una de las causas de agitación y de disgusto social más hondas que existen en la sociedad moderna; lo ha dicho ya Lecky, en su admirable libro «Democracia y libertad.» tratando de estas cuestiones sociales, en el cual hace notar cómo lo que agita la sociedad moderna, lo que la hace estallar en movimientos de violencia y de fuerza, es el creciente y permanente espectáculo de las desigualdades y las injusticias humanas y sociales, en el que los grandes delinquentes quedan impunes, y en cambio las leyes redoblan su rigor con los delinquentes de condiciones inferiores.

¿Dónde se elaboran las revoluciones? Se elaboran en las cabezas directivas de los grupos; pero esa no es efectivamente la revolución; la revolución la hacen los brazos, la gran multitud, calentada, estimulada, exaltada por la pasión que comunican los oradores, los cabecillas y jefes. Ellos obran sobre el corazón, sobre la sensibilidad de las masas; y esas son, precisamente, las pasiones que los cabecillas agitan, y son invisibles para las altas clases, que llegan á creer que no existen, porque ellas no las ven ni las experimentan de cerca.

Por otra parte, hablando Bryce de la

efectividad de las leyes penales, no daba gran importancia á la ley penal en sí, ni á la pena en su virtualidad correctiva; cree más en la educación del medio que en la efectividad de la pena. Por otra parte, el castigo de la venalidad del voto, de que tanto se habla, á tal punto que contra el sistema uninominal ha llegado á hacerse el argumento supremo de que facilitaba el comercio del voto, es más imaginativo que real. No creo que haya juriconsulto en la tierra capaz de definir con precisión los delitos que no salen de la esfera privada. Nadie puede penetrar en la conciencia de los hombres, ni en los detalles íntimos de la vida, ni vigilar el fondo de sus bolsillos.

Por consiguiente, es una tarea inútil, es una tarea ineficaz, que sólo consigue hacer aumentar disposiciones en las leyes, sin resultado alguno; y eso no tiene importancia, porque las grandes masas humanas no se mueven por interés de un individuo;—basta decir masas, para que se entienda ley correctiva, de coacción y movimiento,—y véase, sino, en Estados Unidos, cómo se agolpan esas inmensas masas sufragantes, que dan por resultado que voten cincuenta ó sesenta millones de hombres. Esas son las fuerzas que dan vida y poder incontrastable á las grandes mayorías; lo demás son simples cosas que pasan inadvertidas al observador más sagaz, siempre que no se trate de delitos comunes que todos los códigos castigan. Todas esas pequeñas acciones, que ordinariamente constituyen el tráfico de votos, son imperceptibles para el legislador; están fuera del alcance de la ley. Creo que vale más la pena de dejarlas libradas á su propio correctivo y esperar que la cultura, la educación progresiva de las masas vaya suprimiendo todos esos defectos, que son resabios de nuestras corruptelas, de nuestra educación política.

Por lo que respecta al voto obligatorio propuesto, el proyecto del Poder Ejecutivo iba mucho más lejos sin duda que el despacho de la Comisión de la Cámara de Diputados. La ley belga de 1894 no estableció tampoco sanciones muy eficaces,—verdad es que se trataba de una sociedad mucho más uniformemente educada:—creyeron más en el valor declaratorio de la ley que en las pequeñas sanciones judiciales que ella establecía, po-

niendo bajo la jurisdicción de los jueces de paz la aplicación de las multas graduales que las infracciones originadas. Entre nosotros, la Comisión de la Cámara de Diputados, obrando quizá con prudencia, ha suprimido las sanciones violentas que el proyecto del Poder Ejecutivo ha tomado de la ley española, y que, en realidad, llegaban demasiado lejos en su rigor penal.

Por mi parte, al aceptar el voto obligatorio proyectado por la Comisión de la Cámara de Diputados y en substancia por el Poder Ejecutivo, no me he guiado por una creencia en su eficacia —lo he dicho ya al comenzar—lo he hecho, porque creía de buena doctrina consignar en una ley un principio que es esencial á la existencia del gobierno y, lo confieso, es por espíritu de consecuencia teórica y de consecuencia principista que no he tenido inconveniente en aceptarlo, sin que desconozca sus enormes peligros en una sociedad como la nuestra. Yo me traslado al interior de nuestras provincias, á esas campañas lejanas donde el comisario, el juez de paz ú otros pequeños agentes de la administración llegan á apoderarse de toda la masa ciudadana y hacen sentir sobre ella real y efectivamente la presión que se produce desde las altas esferas. Generalmente, las poblaciones de esas vastas campañas alejadas de los centros urbanos de nuestras provincias, son víctimas, con motivo ó sin él, de estos agentes oficiales. La lista de sus padecimientos es muy larga: necesitaría una palabra descriptiva mucho más animada que la mía; quizá la del señor Ministro del Interior le diera un relieve de que la mía es incapaz; pero basta decir á los que conocemos el interior de nuestro país que el comisario de policía ó el agente del gobierno, bajo cualquier nombre que sea, se va á encargar de hacer efectivo en todos nuestros paisanos y modestos conciudadanos la obligación de votar, y va á tener en sus manos guardado este instrumento de amenaza y de coacción en todos los actos: esto es para mostrar el gran peligro y, por lo tanto, la grave obligación que contraería el Poder Ejecutivo, los gobiernos de provincia y toda autoridad en el país: de poner en la ejecución de esta ley la más grande sinceridad y la más alta virtud republicana y cívica.

Se ha dicho, señor Presidente, con razón, á mi juicio, de cierto punto de vista, que la obligación del voto es incompatible con la inconsciencia del acto; es decir, que no se podría hacer efectiva á los analfabetos. En la ley, según mi recuerdo, está la excepción y libra de esta contingencia á los analfabetos. En esto, la ley ha sido lógica, naturalmente, pero sienta, además, un gran precedente y una declaración de principios que serán siempre saludables en todas las leyes. En cuanto al mecanismo de la ley, también, si hubiese procedido yo al estudio de ella con criterio intransigente, con un examen minucioso, aun literal y de confrontación y de simplificación, tal vez hubiéramos podido proyectar algún mecanismo más sencillo y más compatible con nuestras prácticas; porque advierto que el mecanismo inventado y el procedimiento que le sigue, son de una aplicación sumamente peligrosa; y me temo mucho, y cualquiera que vea este procedimiento con atención, tendrá que ceder á la experiencia y á una prueba muy elocuente, para admitir que este procedimiento puede ser eficaz y fácilmente practicable.

Se nota, señor Presidente, una concentración de poderes excesivo en manos del presidente del comicio. El Poder Ejecutivo había proyectado que estos presidentes de comicios fueran nombrados por él. La Cámara de Diputados, con buen acuerdo, ha reducido esta excesiva concentración para volver al antiguo y buen sistema reinante en el país, y que figuraba en otras leyes, de delegar esta designación en la junta general del distrito: hay más garantías en este último; y, aunque en un poder ejecutivo transitorio puede desaparecer todo peligro de abuso y de coacción, debemos siempre pensar que no legislamos solamente para nosotros sino también para el porvenir.

Es de esperar, con una pequeña modificación que la Comisión ha introducido, de aumentar el tiempo de duración del acto electoral, que alcanzará para todas las incidencias posibles, no solamente para el procedimiento ordinario sino para todas las perturbaciones que el interés político, la astucia, la artimaña y el fraude que se puede llegar á introducir al mecanismo del voto. El Poder Ejec-

utivo, que se ha preocupado tanto de imitar leyes extranjeras, si hubiese imitado á algunos Estados americanos ó europeos, á buen seguro que hubiera adoptado el sistema de la seguridad del voto, haciendo casillas especiales para el caso; y no este sistema que se ha adoptado, sin duda en atención á disminuir gastos, ó á las condiciones de nuestras poblaciones del interior, de secuestrar al elector en una habitación cerrada, sin comunicación, y donde, así como puede realizarse el milagro de aquella retorta de la leyenda española, puede también producirse una transformación enteramente contraria á lo previsto por los que buscan la sinceridad del voto.

Dejo de lado estas consideraciones, señor Presidente, para ocuparme, en breves palabras, de la cuestión fundamental, del sistema de elección.

El Poder Ejecutivo, con un laconismo que yo he lamentado al comenzar, solamente ha enunciado este proyecto con estas palabras: «Mientras la Constitución Nacional no sea reformada, tampoco es posible pasar directamente y de una vez á la representación de las minorías. Dentro del sistema electoral á pluralidad de sufragios impuesto por la Constitución, el Poder Ejecutivo ha querido dejar, á título de ensayo preparatorio de la reforma definitiva, el sistema de lista incompleta que comprende el proyecto adjunto».

Yo, en realidad, lamento que el Poder Ejecutivo no haya entrado en explicaciones más circunstanciadas, no sólo del sistema en sí, que es desconocido en la República Argentina, y que es además poco estudiado en la ciencia política en general y ha sido poco experimentado en otros países, en los que imprimen el modelo ó molde á la cultura política contemporánea, sino que era necesario conocer el pensamiento del Poder Ejecutivo más á fondo en cuanto á la relación del sistema que presentaba, con el sistema constitucional argentino y con los precedentes de nuestro derecho electoral, para explicar al mismo tiempo la necesidad imprescindible á su juicio de este simple ensayo preparatorio de reforma definitiva aplicado á toda la Nación, y al cual se subordinan las elecciones generales de la República; cuando un buen criterio experimental estaba indicando que podía

haberse elegido un sistema ya experimentado y practicado en el país, como ser el sistema uninominal, ó bien proponer un ensayo parcial en una región de la República para una elección determinada.

Un buen criterio de legislación, exigía que el gobierno enunciara el ensayo, pero esto importaba colocarse en un campo de experimentación, como lo ha demostrado con una elocuencia extraordinaria, en la Cámara de Diputados, el Diputado por Buenos Aires, señor Costa.

Ningún sistema en la República Argentina que no sea el de lista ha sido más experimentado en el sentido que esta palabra tiene en la ciencia política, que el sistema uninominal; pues que, como he dicho, ha sido propuesto en el año 57 por Sarmiento, como idea, después como Presidente de la República con su Ministro Vélez Sársfield, más tarde, cuando en 1883 reproducido en esta Cámara, fué sostenido por Avellaneda, con esa elocuencia incomparable, solo suya, y renovado después sucesivamente en cuanto tentativa de reforma electoral se ha presentado en los gobiernos del doctor Sáenz Peña y del general Roca. A cada una de estas presentaciones de proyectos ó iniciativas ha correspondido naturalmente una amplia discusión; de manera que un curso más acabado de ciencia electoral, alrededor de ese sistema, no ha presenciado nuestro país, ni aun el sistema que hoy rige, puesto que este no ha sido nunca discutido, sino para implantarlo de hecho, ó para combatirlo en cuanto debate provocaron las reformas electorales propuestas.

Entonces, el criterio experimental del Poder Ejecutivo en esta materia no es sostenible y solamente se refiere á iniciar como simple ensayo preparatorio una transformación radical del régimen político existente.

El sistema propuesto por el Poder Ejecutivo, que se denomina de lista incompleta, ó voto limitado, he dicho que en la ciencia y en la legislación, es un sistema poco estudiado. No se le ha prestado atención preferente, y salvo algunos teóricos, que en épocas de reformas apresuradas suelen abundar y presentar proyectos de todo orden, nadie lo ha considerado, y sólo se ha llegado á exponerlo como un ensayo posible y favorable, pero no ha llegado á convertirse

en ley, sino parcialmente en España y algunos Estados de la Unión Americana; y, en cambio, se presenta el espectáculo contrario respecto al sistema anteriormente vigente, el que en las más grandes naciones se ha modificado á medida que las conquistas de la libertad van ampliando los derechos populares. En Estados Unidos, nuestro gran modelo, es interesante lo que ocurre: el sistema uninominal sirve de cimiento, como de roca incommovible á toda la vida nacional, y encima de él dejan que las olas se agiten, que la tempestad venga y se vaya; pero nunca se altera la costumbre del distrito. Las legislaturas de Estado, las municipalidades, las asociaciones particulares, todos esos núcleos de acción colectiva social han experimentado algunas veces el sistema del voto incompleto, el que se aplica generalmente á pequeñas extensiones de territorios, donde los movimientos son fáciles y donde el prorrateo de las representaciones no afecta la esencia de la representación parlamentaria, que es la que está en directa relación con el Estado.

Hay un autor francés, especialista en derecho electoral, que juzga este sistema en una forma completa, y después de hacer un análisis general de todos los otros sistemas presentados á la discusión pública y ensayados en diversos países, hace su crítica autorizada, diciendo: «Por éste ninguno de los electores tiene derecho á votar por la totalidad de los asientos. Este sistema—agrega—suscita objeciones serias, es puramente arbitrario, limita el derecho del elector, pero no da á las minorías una parte proporcionada á su importancia, y, además, una mayoría bien disciplinada, puede acaparar todos los asientos. Así, por ejemplo, si 99 electores tienen que elegir 3 candidatos, siendo la mayoría de 60 y la minoría de 39, si esa minoría se divide, con los 60 votos se pueden obtener los 3 candidatos; y, en el sentido inverso, una minoría bien disciplinada puede conseguir una fuerte representación si la mayoría se divide. Se ha propuesto el caso de cinco bancas á elegir y, en ese caso, si la mayoría vota como un solo hombre por 4 candidatos, saca esos 4 candidatos; pero, si esa mayoría, que es, digamos de 1040, se divide en 5 partes igual-

les y vota por distintos candidatos, sólo sacaría 1. mientras que la minoría, que es de 230, sacaría 4. Estas cifras son evidentemente elegidas para hacer resaltar los inconvenientes del sistema; pero, un principio que puede llegar á producir tales consecuencias, es un sistema empírico y aleatorio. En el caso de no haber minorías, el sistema obliga á crear una minoría artificial, y algunos autores llaman á este sistema de lista incompleta ó voto limitado, no sistema de la representación de las minorías, sino sistema de la corrupción de las minorías.

Pero, ahora lo que importa es ver si este sistema encuadra en la Constitución. No voy á hacer sobre este punto una larga exposición, pues ha sido tratado en distintas ocasiones y por personas muy competentes. Creo haber demostrado yo también su constitucionalidad durante el extenso debate de la reforma de 1902. El artículo 37 de la Constitución, interpretado, no con argucias, ni con ciencia ni con teorías, sino con sentido literal, liso y llano, sólo requiere tres cosas: el voto directo, la proporcionalidad entre el elector y el elegido y la simple mayoría—ó pluralidad de sufragios. Hay que fijarse que no habla del régimen proporcional ni de sistemas matemáticos de representaciones, habla simplemente de mayorías. El sistema de lista incompleta, como el de lista completa, no realiza en toda su verdad la condición del voto directo, como que el sistema de lista hace que el elector vote por una lista común, que él no ha contribuido á formar sino de una manera muy indirecta, pues delega, por una práctica universal, en asambleas secundarias la organización de la lista; son una especie de poder subsidiario formado por la fuerza de la costumbre estas juntas ó asambleas intermediarias que se llaman comités ó convenciones de los partidos, y que en cualquiera forma procuran uniformar y disciplinar los votos.

Algunos han dicho que los partidos no figuran en la Constitución; aunque se sepa que la opinión se divide en partidos, y que de otra manera no funciona esta máquina del poder electoral; pero, en efecto, la Constitución no habla de partidos ni hace de ellos un poder público; no les confiere en ninguna forma

ni grado la designación de los funcionarios, pues todo lo atribuye al pueblo ó á los representantes del pueblo. La Constitución, en su artículo 37, habla del pueblo de la República.

No digo yo que el sistema de lista completa ó incompleta no realice en una forma más ó menos remota la representación directa; pero duplica el camino. se va por la vía más larga. Realizando una vez más la fórmula de que en este país el pueblo no ha votado realmente nunca, ó siempre lo ha hecho bajo la dirección de tutores particulares ó personales, encargados de arreglar el resultado de la elección, la lista incompleta, que no es más que la lista completa con un cercenamiento arbitrario para las minorías, tiene los mismos defectos, naturalmente que su hermana mayor, desde que la lista incompleta tiene que formarse de la misma manera, por los mismos procedimientos que la lista completa, por medio de los comités, por tutores oficiosos de la masa del pueblo, que es la llamada á votar.

Dentro de la Constitución, en términos claros é interversables, lo que se exige es la simple mayoría. Todo el que tiene mayoría tiene derecho á un representante. ¿Cómo es posible que sea constitucional ningún sistema inventado para dar representación á quien no tiene mayoría? Por eso es que todos los sistemas matemáticos inventados para dar representación á la minoría,—sistemas que están de moda, sin duda alguna,—pueden ser aplicados para otros parlamentos y otros países donde la vida política es otra muy distinta, y, sobre todo, donde no existe el precepto del artículo constitucional argentino, claro y rígido, según el cual el sistema que se adopte deberá hallarse encuadrado dentro de esta triple base: voto directo, proporcionalidad entre la población y el número de representantes á elegir, y la simple mayoría como medio decisivo de la opinión.

Entonces, pues, si la lista incompleta pretende colocarse en el grupo de los sistemas proporcionales, y de esa manera quiere ofrecer un porcentaje en favor de las minorías, realiza un acto inconstitucional, porque no puede dar representación al que no tiene mayoría; y esto me parece una cosa tan clara, que no cabe interpretarla sino dentro del

criterio arbitrario y elástico con que en este caso se quiere interpretar la Constitución, hasta hacer admitir, como se ha dicho también, que todos los sistemas electorales caben dentro de ella. Sería mejor derogar el artículo 37 y decir: «El Congreso dictará la ley que le parezca mejor».

Como se ve, el único sistema que realiza la proporcionalidad, el voto directo y la simple mayoría es el sistema derogado con tal mal acuerdo en 1905; porque ese es el que elige en forma directa é inmediata, establece la proporcionalidad que la Constitución le marca y al mismo tiempo establece la simple mayoría, de modo que ninguna minoría pueda concurrir á la Cámara de Diputados, sin ser mayoría en la circunscripción. El sistema uninominal tiene, además, en su favor la experiencia universal, que nos enseña que él realiza la verdad del voto.

Sr. Láinez—Podríamos pasar á cuarto intermedio hasta mañana. Es natural que el señor Senador esté fatigado y, por otra parte, nosotros tenemos que continuar el estudio de la ley que se discute.

Sr. González—Ya que he tenido la desgracia de causar una demora de dos días, no quisiera demorar más á la Cámara; pero, por otra parte, yo no puedo tampoco sacrificar...

Sr. Presidente—La Cámara resolverá si acepta ó no pasar á cuarto intermedio.

Sr. Maciá—El pasar á cuarto intermedio no es moción de orden; basta con que el señor Presidente haga la indicación.

Sr. Presidente—Como el señor Senador por Buenos Aires hizo moción, que fué aprobada, de pasar á cuarto intermedio hasta mañana, es que yo no puedo decidir, y pongo á votación de la Cámara, el que ella resuelva si ha de pasar ó no á cuarto intermedio hasta mañana.

Sr. Maciá—En ese caso, sí.

Sr. Presidente—Se va á votar si se pasa á cuarto intermedio hasta mañana.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Eran las 5.50 p. m.

ARTURO PARODY,
Director de Taquígrafos.